



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL.

Medellín, cinco (05) de julio de dos mil veintidós (2022).

DEMANDANTE: SANDRA MARÍA MONTOYA VALDERRAMA.
DEMANDADO: PROTECCIÓN S.A. y Otros.
TIPO DE PROCESO: ORDINARIO.
DECISIÓN: **ADICIONA y CONFIRMA.**

En la fecha, **EI TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados, Nancy Gutiérrez Salazar, Carlos Alberto Lebrún Morales y María Eugenia Gómez Velásquez, procede a revisar el recurso de apelación interpuesto por Protección S.A., Porvenir S.A., y Colpensiones y el Grado Jurisdiccional de Consulta que se surte en favor de esta última, frente a la Sentencia proferida en el Proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora **SANDRA MARÍA MONTOYA VALDERRAMA**, en contra de **PROTECCIÓN S.A.**, de **PORVENIR S.A.**, de **COLFONDOS S.A.** y de **COLPENSIONES**.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, en los términos del poder obrante en el archivo 06 -Segunda Instancia-, se reconoce personería para actuar en representación de COLFONDOS S.A. al abogado Jair Fernando Atuesta Rey, con Tarjeta Profesional 219.124 del C.S. de la J.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA:

DEMANDANTE.

Pide que se confirme la sentencia de instancia, al no haberse demostrado la asesoría que debió brindársele al momento del traslado al RAIS, limitándose las AFP demandadas a la suscripción del formulario de afiliación; y sin haber prestado un acompañamiento a la demandante que permitiera contrarrestar la negligencia generada al momento de tal traslado.

PROTECCIÓN S.A.

Frente a la declaratoria de Ineficacia de traslado de régimen, expone que este último goza de validez, en la medida que la AFP cumplió con su deber legal de brindar una asesoría integral y completa a la demandante, tomando ésta una decisión libre y voluntaria. Que la actora realizó actos de relacionamiento, como lo es haberse trasladado entre entidades administradoras, convalidando su afiliación al RAIS, sin que la misma ejecutara actos tendientes a materializar su retorno al RPMPD. Sobre la comisión de administración dice que el descuento se hizo con base en la ley, y está previsto en ambos regímenes, generándose buenos rendimientos en la administración de los recursos de la afiliada, por lo que no hay lugar a la devolución de la misma, ya que ello implicaría desconocer la gestión desarrollada por esta AFP.

COLFONDOS S.A.

Solicita que se confirme la decisión de la A quo de no ordenar a esta AFP el retorno de ningún concepto al RPMPD, teniendo en cuenta que ella trasladó todos los aportes existentes en la cuenta pensional que alguna vez tuvo la demandante, incluyendo el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima; descontándose los gastos de administración y seguros previsionales por disposición legal, cumpliéndose con la destinación para la cual fueron creados y sin que estos sean un factor de financiación de la pensión de vejez de la actora. Que no es posible ordenar la indexación de los conceptos cuyo traslado se ordenó, porque con los rendimientos generados se compensa tal concepto, además de que esto no fue objeto de petición en la demanda, no se incluyó en el objeto de debate, ni fue objeto de impugnación por las partes, por lo que una condena en tal sentido desconocería el Principio de consonancia, sin que tampoco pueda ordenarse una eventual diferencia entre aportes.

COLPENSIONES.

Dice que se debe revocar y modificar la decisión de instancia, ya que la parte actora no logró acreditar los supuestos de hecho y de derecho de la declaratoria de Ineficacia de su afiliación al RAIS, debiéndose considerar que la carga de la prueba no debe recaer exclusivamente en la AFP privada, sin ningún esfuerzo por parte de la demandante, desconociéndose su permanencia en el Sistema, su silencio y su aceptación en el tiempo de permanecer en el RAIS; afectándose así colateralmente los intereses de COLPENSIONES. Que el deber de información ha tenido diversas etapas, sin que a la AFP se le puedan imponer cargas adicionales, máxime que no se demostró vicio o fuerza capaz de anular el acto jurídico, y que se debe analizar cada caso en particular. Que el interés general prevalece sobre el particular, así como el Principio de sostenibilidad financiera del Sistema y el derecho a la Seguridad Social de los demás afiliados. Y finaliza señalando que en esta instancia tampoco se generan Costas Procesales, debiéndose acoger el criterio subjetivo de imposición previsto en el numeral 8 del Art. 365 del C.G.P.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

ANTECEDENTES:

PRETENSIONES:

- Declarar la Ineficacia o nulidad del traslado de la demandante del RPMPD al RAIS,.
- Condenar a PROTECCIÓN S.A. a devolver a COLPENSIONES, y a esta a recibir, la totalidad de los aportes realizados por la demandante con sus respectivos rendimientos, debidamente indexados.

HECHOS:

- Que inició su vida laboral afiliándose al ISS el 2 de julio de 1992, con cobertura para los riesgos de vejez, invalidez y muerte.
- Que el 26 de febrero de 1996 se trasladó al RAIS por medio de PROTECCIÓN S.A., luego en el año 1997 a PORVENIR S.A., en el 2001 a COLFONDOS S.A., regresando a PROTECCIÓN S.A. el 15 de junio de 2010; traslado que se dio porque un asesor de esta última entidad la indujo en error, al omitir el deber de información clara, precisa y oportuna sobre el alcance de su decisión.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Declaró la Ineficacia del traslado de la demandante del RPMPD al RAIS. Ordenó a PROTECCIÓN S.A. trasladar a COLPENSIONES, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la Sentencia, todos los aportes realizados por la demandante al riesgo de pensiones existentes en su cuenta de ahorro pensional, junto con rendimientos y las comisiones cobradas. Ordenó a Colpensiones validar la equivalencia de los recursos trasladados en semanas de cotización. Declaró implícitamente decididas las Excepciones propuestas; y Condenó en Costas Procesales a PORVENIR S.A., a PROTECCIÓN S.A., y a COLFONDOS S.A., exonerando de estas a COLPENSIONES.

RECURSO DE APELACIÓN.

PROTECCIÓN S.A.

Dice que la vinculación de la demandante goza de la presunción de validez, demostrándose en el Proceso que ésta contó con una asesoría que cumplió con los parámetros legales. Frente a la orden de devolver las comisiones de administración, dice que éstas están respaldadas en la ley y la jurisprudencia, generándose en ambos

regímenes pensionales y como una contraprestación por la buena administración de los recursos, cuotas que ya se causaron y que de devolverse generarían un enriquecimiento sin causa en favor de Colpensiones.

PORVENIR S.A.

Solicita que se revoque la sentencia de instancia, la cual es contraria a los Principios de confianza legítima, inescindibilidad de la norma y sostenibilidad financiera del sistema, al habersele restado valor probatorio al formulario de afiliación, con el cual se da validez a tal acto formal. Que a la entidad se le exige el suministro de una información que no estaba obligada a suministrar atendiendo la fecha en la que se dio el traslado de régimen, desconociéndose que no fue esta la que generó tal traslado; y sin que haya lugar a la condena en Costas Procesales en su contra, ya que esta atiende a un factor objetivo para su imposición.

COLPENSIONES.

Pide que se revoque la sentencia en cuanto le ordenó la activación de la afiliación de la demandante en el RPMPD, sin que haya lugar a la declaratoria de Ineficacia al no probarse los supuestos de hecho y derecho en que se basa, pues no se incumplió con el deber de información ni existió un vicio en el consentimiento; allegándose al Proceso los formularios de afiliación de los que se desprende que la actora decidió trasladarse de régimen en forma libre, permaneciendo en el RAIS y cotizando en este por más de 5 años, no pudiéndose imponer a los diferentes Fondos de pensiones, el suministro de una información no prevista en la ley. Que en el interrogatorio de parte se evidenció que la demandante fue renuente y evasiva en cuanto a la información suministrada por ellos; y finaliza expresando que no es posible que la afiliada que no contribuyó al Fondo común, se vea beneficiada del mismo, afectando la Sostenibilidad Financiera del Sistema.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

- **Objeto:** Determinar si en el caso a estudio, es o no procedente la declaración de Ineficacia del traslado efectuado por la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; las consecuencias que de ello se derivan; y lo concerniente con las Costas Procesales a cargo de PORVENIR S.A. Veamos:

En el caso concreto, la demandante se afilió al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, inicialmente al ISS hoy COLPENSIONES desde el **2 de julio de 1992**, según se infiere del formulario de inscripción de trabajadores -fl. 10, archivo 01, primera instancia-, y de la Historia Laboral de fl. 16 ibídem; trasladándose al RAIS a través del Fondo privado de pensiones PROTECCIÓN S.A. el **26 de febrero de 1996**, según consta en la solicitud de

vinculación de folio 12 *ibid.*, luego a PORVENIR S.A el **15 de mayo de 1997**, tal como consta en la solicitud de vinculación de fl. 13 *ibid.*, posteriormente a COLFONDOS S.A. el **11 de diciembre de 2000**, según se infiere de la solicitud de vinculación o traslado de fl. 19 *ibid.*, y finalmente regresó a la primera AFP referida el **26 de mayo de 2010**, tal como consta en la solicitud de vinculación de fl. 112 *ibid.*, en el reporte SIAFP y en el historial de vinculaciones de folios 113 y 216 *ibid.*, respectivamente.

Respecto al tema de la Ineficacia de traslado de régimen pensional, conforme a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Cas. Laboral, vertida en Sentencias Radicados 33.083 del 22 de noviembre de 2011, y 46.292 del 03 de septiembre de 2014, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón, y más recientemente en las Sentencias Laborales 1452 del 3 de abril de 2019, Rad 68852 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo y 1421 del 10 de abril del mismo año, Rad. N.º 56174 M.P. Gerardo Botero Zuluaga, para los casos de afiliados, las Administradoras de Fondos de pensiones tienen el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculan a ellas, que surge desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de la afiliación, por lo que el engaño en el que incurre la entidad, tiene su fuente en la falta al deber de información, tanto en lo que se afirma, como en lo que se omite informar sobre lo que resulte relevante para la toma de la decisión que se persigue, independientemente que para el momento del traslado, una norma lo exija o no.

Ahora, respecto a la firma del formulario proforma, en la Sentencia Laboral 1688 del 8 de mayo de 2019, Rad. N.º 68838, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, dicha Corporación sostuvo que:

“... no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada”.

“... la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «*la afiliación se hace libre y voluntaria*», «*se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones*» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no *informado*...”

En similar sentido, se pronunció dicha Corporación en la SL 4360 del 9 de octubre de 2019, Rad 68852, M.P Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, era PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A., las que tenían la obligación de probar en el Proceso que brindaron una asesoría personalizada y completa a la demandante al momento de su traslado de régimen, analizando las circunstancias

particulares de su caso, debiéndole informar por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima -equivalente al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993, actualizado con el IPC-, debe seguir cotizando, si es o no beneficiario del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería, y en fin, mostrarle al afiliado **con detalle**, las ventajas y desventajas de tomar la decisión de traslado, para que la misma sea realmente consensuada, libre y voluntaria y otras tantas observaciones al respecto.

Y es que debe reiterarse que la labor del funcionario del Fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al “DEBER DEL BUEN CONSEJO”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral; en la medida que es responsabilidad de dichas Administradoras y de sus promotores, velar por la información realmente suministrada a sus usuarios -art. 10 Decreto 720 de 1994 por el cual se reglamentaron los arts.105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993-; lo cual fue reiterado en el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2255 de 2010, que le impone a las Administradoras de Fondos de pensiones, en desarrollo de tal deber, la obligación de proporcionar a los consumidores financieros información completa, así como los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de la decisión.

Ahora, si bien PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A. afirmaron al contestar la demanda que a la demandante se le brindó la asesoría requerida para el caso –Fls. 75 a 104, 251 a 264, y 182 a 213 *ibid.*, respectivamente-, de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita tenían la carga de acreditarlo, y, sin embargo, la prueba que trajeron al proceso no fue lo suficientemente persuasiva de ello, pues nótese que los formularios de afiliación y/o traslados ya referenciados corresponden a unos preestablecidos que no dan cuenta de la información realmente suministrada a aquella en ese momento; y sin que con los comunicados de prensa de fls. 277 a 279 *ibidem* -generales e ilegibles por demás-, los documentos denominados “políticas asesorar para vincular personas naturales” – fls. 120 a 124- y “administradoras de fondos de pensiones, deber de asesoría e información al consumidor financiero” –fls. 230 a 233-, de los cuales no se conoce si fueron o no suministrados a la demandante, o por el hecho de haber realizado ésta actos de relacionamiento -como es recibir extractos, haber permanecido un largo periodo de tiempo en el RAIS o haber efectuado traslados entre AFP’S-, se pueda dar por ratificado el acto inicial de traslado de régimen pensional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 898 del Código de Comercio, pues como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte

Suprema de Justicia, la oportunidad de la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado, y no con posterioridad al mismo –Sentencia Laboral 1688 de 2019 antes citada, en la que se reitera lo expuesto en la también citada Sentencia 19447 de 2017-.

Aunado a lo anterior, del interrogatorio de parte que absolvió la demandante en el Proceso, no se desprende confesión alguna, y si bien es cierto, a muchas de las preguntas formuladas respondió que “no recordaba”, quizás por el paso del tiempo, en criterio de la Sala ésta no fue evasiva en sus respuestas, respondiendo cada una de las preguntas formuladas por el Despacho y los apoderados.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió una de las solemnidades legalmente previstas para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, como lo es el deber de información en un asunto tan importante para un afiliado por su incidencia en el derecho pensional, trayendo como consecuencia la declaración de Ineficacia del traslado de régimen, y con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes de la misma, como que el demandante nunca se trasladó al RAIS.

Consecuente con lo anterior, se **CONFIRMARÁ** lo decidido por el juez de instancia al respecto.

TRASLADO DE SALDOS.

Considera la Sala que al declararse la Ineficacia del traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante; por lo que es legítimo que PROTECCIÓN S.A. -Fondo en el que actualmente se encuentra afiliada la demandante- traslade a Colpensiones el 100% de los aportes obligatorios efectuados por esta última, esto es, el saldo de la cuenta de ahorro individual, los rendimientos financieros y los gastos de administración, tal como lo concluyó el juez de instancia, pero incluyendo además, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, la Prima de reaseguros de Fogafín, y los aportes al Fondo de solidaridad pensional -en caso de haberse generado-, causados durante el tiempo en que la actora estuvo afiliada a dicha Administradora; correspondiéndole a PORVENIR S.A. y a COLFONDOS S.A. devolver los gastos de administración, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, la Prima de reaseguros de Fogafín, y en caso de haberse generado, los aportes al Fondo de solidaridad pensional, descontados durante el tiempo en que la actora estuvo afiliada a dichas Administradoras, ya que si bien a folios 214 y 267 ibid., obra constancia del traslado de aportes realizado por estas dos últimas AFP'S, lo cierto es que en esta solo se refleja el traslado de una

determinada suma de dinero sin especificar a que conceptos pertenecen. Lo anterior, según lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral desde la Sentencia Radicado 31.989 del 9 de septiembre de 2008, M.P. Eduardo López Villegas, y más recientemente en las Sentencias Laborales 4.989 y 4.964 del 14 de noviembre de 2018, Radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, y en la 1.688 del 8 de mayo de 2019, Radicado 68.838 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. **CONFIRMA y ADICIONA.**

Y es que no comparte La Sala los argumentos expuestos por la apoderada de PROTECCIÓN S.A en torno a la orden de devolución de las cuotas de administración, ya que si bien del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 se desprende que del valor mensual de la cotización, un porcentaje se destina al pago de tal concepto y este se genera en ambos regímenes pensionales, lo cierto es que ante la declaratoria de Ineficacia del traslado de régimen, al volver las cosas al estado en el que se encontraban antes de la misma, estos no se pueden generar ni en favor de las Administradoras de Fondos privados de pensiones demandadas, ni en favor de terceros, sin que además, tal reintegro dependa de la gestión realizada, la pérdida de la especie, el detrimento del bien, o de la equivalencia de los rendimientos.

Adicional a ello, La Sala se permite resaltar que el precedente judicial proveniente de los máximos órganos de cierre tanto de la justicia constitucional como de la justicia ordinaria, vincula a los demás jueces, es decir, es de obligatorio cumplimiento, al tenor de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la SU 354 del 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escruce Mayolo, en la que manifestó:

“Según lo consagrado en los artículos 234, 237 y 241 de la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, como tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, al igual que la Corte Constitucional, como órgano encargado de salvaguardar la supremacía e integridad de la Carta, tienen el deber de unificar la jurisprudencia al interior de sus jurisdicciones, de tal manera que los pronunciamientos por ellas emitidos se conviertan en precedente judicial de obligatorio cumplimiento...”

(Otra Providencia en similar sentido, es la SU 611 del 4 de octubre de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).

Ahora, tampoco son de recibo los argumentos expuestos por la apoderada de Colpensiones en relación con el Principio de Sostenibilidad financiera del sistema y la protección del derecho a la Seguridad Social de los demás afiliados al RPMPD, ya que con el traslado del 100% de las cotizaciones efectuadas por la demandante a lo largo de su vida laboral y los rendimientos financieros, se contribuye al Fondo común de naturaleza pública.

Aunado a lo anterior, advierte la Sala que el traslado de los recursos debe hacerse con el suministro de la información prevista en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016 -por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones-, esto es, entregando la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, especificando cada valor, "...junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen ...", según lo sostuvo la Sala de Cas. Lab. de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia Laboral 1637 del 11 de mayo de 2022, Radicado 89208, M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz. **ADICIONA.**

Se **CONFIRMARÁ y ADICIONARÁ** así mismo la orden dada a Colpensiones de recibir las sumas provenientes de PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A. para financiar la pensión de vejez de la actora.

CONFIRMAR en lo demás.

COSTAS PROCESALES.

El artículo 365 del Código General del Proceso, establece:

"En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso..."

Sobre este tópico, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en Sentencia del 22 de enero de 2013, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno, Rad. 40,993, sostuvo:

"Al respecto es preciso anotar que la disposición referida contiene un criterio objetivo, dado que no condiciona su imposición a circunstancia distinta a la pérdida del proceso o uno de los recursos a que se refiere, de allí que el actuar de buena fe no constituye razón de exoneración de la obligación que tiene la parte vencida de pagar los gastos generados con ocasión del proceso"

El mismo criterio viene siendo reiterado por dicha Corporación en las Sentencias 2.141 de 2019, Radicado N° 53.941, M.P. Omar de Jesús Restrepo Ochoa, y 1.107 del 2019, Radicado N°61.008, M.P. Cecilia Margarita Durán Ujueta.

Conforme al anterior criterio jurisprudencial, al haber prosperado las pretensiones de la demanda, declarándose la Ineficacia de la afiliación y condenándose a PORVENIR S.A. a la devolución de los gastos de administración con todos sus componentes, resultando esta vencida en el proceso, hay lugar a las Costas Procesales de primera instancia a cargo de la misma y a favor de la parte activa. **CONFIRMA.**

Las de Segunda Instancia quedan a cargo de PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y de COLPENSIONES por haber resultado vencidas en el recurso, distribuidas en partes iguales, y en favor de la demandante. Agencias en derecho: 1 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE:

PRIMERO: ADICIONAR el numeral **SEGUNDO** de la Sentencia proferida por el **Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín** el 31 de agosto de 2021, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por la señora **SANDRA MARÍA MONTOYA VALDERRAMA**, en contra de **PROTECCIÓN S.A.**, de **PORVENIR S.A.**, de **COLFONDOS S.A.** y de **COLPENSIONES**, en cuanto que la primera demandada deberá efectuar a la segunda, la devolución del 100% de los aportes obligatorios efectuados por la demandante ordenados en la sentencia de primera instancia, pero incluyendo además, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, la Prima de reaseguros de Fogafín, y los aportes al Fondo de solidaridad pensional -en caso de haberse generado-, causados durante el tiempo en el que la actora estuvo afiliada a dicha Administradora; correspondiéndole a PORVENIR S.A. y a COLFONDOS S.A. devolver los gastos de administración, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, la Prima de reaseguros de Fogafín, y en caso de haberse generado, los aportes al Fondo de solidaridad pensional, descontados durante el tiempo en que la actora estuvo afiliada a dichas Administradoras; entregando la historia laboral de la afiliada con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, según las consideraciones de esta sentencia.


SEGUNDO: ADICIONAR el numeral **TERCERO** de la Sentencia de origen y fecha conocidos, en cuanto que Colpensiones también deberá recibir las sumas provenientes de PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A. para financiar la pensión de vejez de la actora.

TERCERO: CONFIRMAR en los demás.


CUARTO: Costas Procesales de Segunda Instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y de COLPENSIONES, distribuidas en partes iguales, y en favor de la demandante. Agencias en derecho: 1 SMLMV.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO** y se firma en constancia.


Los magistrados,



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ